

**17093** *CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 5 de abril de 1999 sobre resolución de solicitudes de proyectos acogidos a la Ley 50/1985, sobre Incentivos Regionales correspondientes a 346 expedientes y la modificación de las condiciones a 35 expedientes resueltos con anterioridad.*

Advertidas erratas en los anexos de la Orden de 5 de abril de 1999 sobre resolución de solicitudes de proyectos acogidos a la Ley 50/1985, sobre Incentivos Regionales correspondientes a 346 expedientes y la modificación de las condiciones a 35 expedientes resueltos con anterioridad, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 124, de 25 de mayo de 1999, páginas 19749 a 19759, a continuación se inscriben las correspondientes rectificaciones:

En el anexo I, en la Zona de Promoción Económica de Canarias, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el expediente TF/237/P06, figura como titular del mismo «Proyectos para Iso, Sociedad Anónima», debiendo figurar «Proyectos Paraíso, Sociedad Anónima». En la Zona de Promoción Económica de Castilla y León, en la provincia de Segovia, figura como titular del expediente SG/173/P07 la empresa «Sociedad Anónima de Minería y Tecnología de Arcillas» (SAMYTA), debiendo figurar «Sociedad Anónima de Minería y Tecnología de Arcillas» (S.A.MYTA).

En el anexo II, en la Zona de Promoción Económica de Canarias, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, figura como titular del expediente TF/239/P06 la empresa «Sociedad Canaria de Estiva, Sociedad Anónima» (SOCAESA), debiendo figurar «Sociedad Canaria de Estiba, Sociedad Anónima» (SOCAESA).

## MINISTERIO DE FOMENTO

**17094** *RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Subsecretaría, por la que se acepta la renuncia de un miembro del Tribunal calificador para la obtención del título profesional de Agente de la Propiedad Inmobiliaria.*

Vista la propuesta de 14 de julio de 1999, del ilustrísimo señor Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, y de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, por la que se convoca examen para la obtención del título profesional de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, se acuerda lo siguiente:

Primero.—Aceptar la renuncia de don Manuel L. Martín Antón, a pertenecer al Tribunal calificador por motivos profesionales.

Segundo.—En consecuencia, y a tenor del número de aspirantes, el Tribunal queda integrado por un total de 20 miembros.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmo. Sr. Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

**17095** *RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se homologan cursos de especialidad marítima al Centro de Formación «Ensinso Profesional Galego».*

Examinada la documentación presentada por doña María de los Dolores Santos Millet, Consejera delegada del Centro de Formación «Ensinso Pro-

fesional Galego», en solicitud de homologación de cursos de especialidad marítima de Especialidad en T Buques Petroleros, y los informes obrantes y de conformidad con lo dispuesto en las Órdenes de 16 de octubre de 1990,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.—Homologar al Centro de Formación solicitante para impartir los cursos de Especialidad en Buques Petroleros.

Segundo.—Quince días antes de la celebración de cada curso remitirá a la Subdirección General de Inspección Marítima, relación nominal del profesorado, acompañada del currículum profesional de cada uno de ellos, así como memoria desarrollada del programa y medios materiales a utilizar durante el curso, a efectos de la oportuna inspección por parte de los servicios de esta Dirección General.

Tercero.—En el plazo de quince días de la finalización del curso, el Centro de Formación remitirá a la Subdirección General de Inspección Marítima las actas del curso y las pruebas realizadas.

Cuarto.—Al personal de la Marina Mercante que haya finalizado con aprovechamiento el curso impartido, se le expedirá por la Dirección General de la Marina Mercante el oportuno certificado oficial a la vista de las actas emitidas por el Centro de Formación o certificación de dicho Centro, en la que conste que han superado las pruebas establecidas.

Quinto.—Esta homologación tendrá una duración de dos años desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», pudiéndose prorrogar a la vista de la memoria, planes de estudios, prácticas y demás documentación que presente el Centro de Formación, sobre los cursos realizados en base a esta homologación.

Sexto.—Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se adecua a los niveles de calidad y profesionalidad necesarios, la Subdirección General de Inspección Marítima efectuará inspecciones periódicas de los mismos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general, Fernando Casas Blanco.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspección Marítima.

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

**17096** *ORDEN de 16 de julio de 1999, por la que se rectifica la de 18 de mayo de 1999, por la que se resuelven los expedientes de modificación de los conciertos educativos de los centros docentes privados.*

Observado error en la Orden de 18 de mayo de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio,

Este Ministerio ha acordado su rectificación conforme se especifica en anexos que se adjuntan.

Madrid, 16 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Educación y Formación Profesional, Roberto Mur Montero.

Ilma. Sra. Subsecretaria e Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

### ANEXO I

Número de código	Denominación, domicilio, municipio, localidad	Unidades Educación Infantil	Educación Primaria				Educación Secundaria Obligatoria				Unidades de Bachillerato		Observaciones
			Unidades	Apoyos		Unidades		Apoyos		BUP/COU	LOGSE		
				Integr. (Mot.)	Min. Etn.	1.º c	2.º c	Integr. (Mot.)	Min. Etn.				
Página 21165, donde dice:													
28020028	Santa Bárbara. Plaza de la Paja, 4, Madrid (Madrid).	0	0	0(0)	0	4	4	0(0)	0	0	0	(19)	
Debe decir:													
28020028	Santa Bárbara. Plaza de la Paja, 4, Madrid (Madrid).	0	0	0(0)	0	4	4	0(0)	0	0	4	(19)	

## ANEXO II (Relación A)

## Ciclos formativos de Grado Medio, Programas de Garantía Social

Número de código	Denominación, domicilio, municipio, localidad	Programas de Garantía Social		Ciclos formativos de Grado Medio	Tipo	U.U. Sol.		A Conc.		Observaciones
		IND/AG	Serv.			1.º	2.º	1.º	2.º	
Página 21208, debe incluirse:										
37008242	Santísima Trinidad, Peña de Francia, 2, Salamanca (Salamanca).	0	0	Cuidados Auxiliares de Enfermería.	DF	0	0	1	0	(5)

## MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

**17097** *ORDEN de 8 de julio de 1999 por la que se concede la encomienda con placa de la Orden Civil de Sanidad a don José Alonso Martínez.*

De conformidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por el que se regula la Orden Civil de Sanidad y, habida cuenta de los méritos y demás circunstancias que concurren en don José Alonso Martínez,

Este Ministerio le concede el ingreso en la Orden Civil de Sanidad, en su categoría de Encomienda con placa.

Lo que se comunica para su traslado al interesado y demás efectos oportunos.

Madrid, 8 de julio de 1999.

ROMAY BECCARÍA

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Consejo de la Orden Civil de Sanidad.

## TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

**17098** *SENTENCIA de 18 de junio de 1999, de la Sala de Conflictos de Jurisdicción, dictada en el conflicto número 2/1999, suscitado entre la Administración del Estado y el Juzgado de Primera Instancia número 20, de los de Madrid.*

En la villa de Madrid, a 18 de junio de 1999.

### Antecedentes de hecho

Primero.—1. Por Auto de fecha 8 de junio de 1993, el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, declaró en situación legal de quiebra a la empresa «Kapy, Sociedad Anónima».

2. La Administración, por diligencia de embargo de fecha 25 de septiembre de 1998, declaró embargados los saldos de cuentas bancarias de titularidad de la empresa quebrada, existentes en la oficina 0058 del «BNP, Sociedad Anónima», de la calle Doctor Esquerdo, 138, de Madrid.

3. El Juzgado de Primera Instancia número 20, de los de Madrid, por providencia de fecha 19 de octubre de 1998, acordó librar oficio a la citada sucursal del «BNP, Sociedad Anónima», a fin de que dejara liberada a disposición de los órganos de la quiebra la cantidad de 35.001.469 pesetas, atendiendo a que el embargo efectuado por la Administración es posterior a la declaración de la quiebra de la empresa «Kapy, Sociedad Anónima» (artículo 95 del Reglamento General de Recaudación).

Segundo.—Por Resolución de fecha 21 de diciembre de 1998, la Administración acordó promover conflicto de jurisdicción al Juzgado de Primera Instancia de Madrid, por entender que las deudas tributarias son concursales. El Juzgado no aceptó el requerimiento de inhibición que le había sido hecho, y por Auto, de fecha 25 de febrero de 1999, acordó mantener su jurisdicción.

Tercero.—El Ministerio Fiscal, en su dictamen de fecha 8 de mayo de 1999, expresó su criterio en el sentido de que el conflicto de jurisdicción se resuelva a favor del Juzgado de Primera Instancia número 20, de los de Madrid.

Siendo Ponente el excelentísimo señor don Eladio Escusol Barra, quien expresa el parecer del Tribunal de Conflictos.

### Fundamentos de Derecho

Primero.—La insolvencia de una determinada empresa puede convertirse en una situación jurídica bien definida si se declara judicialmente en quiebra aquella. La declaración de quiebra produce una serie de efectos: Efectos registrales y de publicidad; efectos sobre los acreedores, efectos sobre los créditos y efectos sobre el patrimonio de deudor.

Los efectos sobre los acreedores se concretan en el hecho de que la quiebra es un procedimiento de ejecución colectiva que tiende a satisfacer a todos los acreedores en igual medida, con todo el patrimonio del deudor. Se trata, pues, de un procedimiento protector de los acreedores y de protección, también, de la masa pasiva de la quiebra o masa de acreedores, entre los que se distinguen los acreedores concursales (anteriores a la quiebra) y los acreedores concurrentes que, siendo posteriores, tienen derecho a integrarse en la masa.

Segundo.—1. En el caso presente se trata de un supuesto de concurrencia de procedimientos: El procedimiento administrativo de apremio y el procedimiento concursal. Pues bien, el artículo 95 del Reglamento General de Recaudación dispone que: En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio y procedimientos de ejecución o concursales universales, judiciales y no judiciales, la preferencia para la continuación en la tramitación del procedimiento vendrá determinada por la prioridad en el tiempo de los mismos, con arreglo a las siguientes reglas:

- En los procedimientos administrativos de apremio se estará a la fecha de la providencia de embargo.
- En los procedimientos de quiebra, se estará a la fecha de declaración de la misma.

2. El único problema a dilucidar es, pues, si las deudas tributarias que reclama la Hacienda Pública son posteriores a la declaración de quiebra o no. Al respecto, del examen ponderado y detenido de las actuaciones hace que, como precisa el Auto del Juzgado de Primera Instancia número 20, de los de Madrid, todos los créditos se hacen constar como devengados en el año 1993, pero no existe prueba que sin duda nos conduzca a afirmar que sean créditos tributarios devengados con posterioridad a la fecha de declaración de la quiebra. Esa duda razonable, determina, por el contrario, que, como dice el Ministerio Fiscal, la gran parte de las deudas reclamadas por la Administración han sido devengadas con anterioridad a la declaración de la quiebra, siendo de consignar que la carga de la prueba correspondía a la Administración (artículo 1.214 del Código Civil). Por ello, sigue expresando el Ministerio Fiscal, que en el caso concreto que nos ocupa, la Hacienda Pública invadió la competencia del Juez de la quiebra.

Tercero.—Lo razonado conduce a tener que declarar que el presente conflicto de jurisdicción debe resolverse a favor del Juzgado de Primera Instancia número 20, de los de Madrid.